



## Comunidades indígenas

22

### Balance de las recomendaciones anteriores

En el tercer ciclo del EPU, dieciséis países hicieron recomendaciones a Colombia en pro de garantizar los derechos de las comunidades indígenas. Las diversas recomendaciones emitidas incluían la necesidad de implementar medidas de protección colectiva (Estados Unidos), la aplicación de políticas estatales que refuercen el derecho a la igualdad y luchen contra todas las formas de discriminación (República dominicana, Nigeria, Serbia, Congo, Senegal y Venezuela), garantizar la participación efectiva (Santa Sede, Perú, Palestina y Suiza) y la plena implementación del capítulo étnico incluido en el acuerdo de paz (Perú y Haití).

Ahora bien, en el tiempo transcurrido entre la emisión de las recomendaciones y el nuevo examen periódico se tiene que no ha habido un avance significativo en su cumplimiento, pese a la recomendación por parte de los Estados Unidos de la implementación de medidas de protección las comunidades indígenas, estas se encuentran enfrentando las consecuencias del conflicto armado interno, ahora con actores renovados o reciclados como los grupos paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los cuales (en conjunto con otros actores armados) tienen a sesenta y cuatro (64) pueblos indígenas en riesgo de extinción (1).

Respecto a las recomendaciones en pro de luchar contra la discriminación que afecta a los pueblos indígenas, encontramos que las comunidades que ancestralmente habitan el territorio colombiano se enfrentan a la dificultad de poner en dialogo sus cosmovisiones, sus formas de habitar los territorios, sus usos y costumbres con la nación colombiana, al punto que sus espacios vitales han sido destinados a la explotación voraz de recursos, acompañado por una marcada ausencia de programas sociales y presencia estatal de cualquier tipo.

Así mismo las mujeres indígenas enfrentan dos fuentes de discriminación, el primero por su pertenencia étnica y la segunda por su cuerpo sexuado. Estando desigual e históricamente expuestas a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados que hacen presencia en los territorios en su búsqueda de controlar los recursos y territorios. El informe La ley de la selva (2), demuestra que las violencias sufridas en sus cuerpos no solo son el resultado de la actuación y complicidad de las fuerzas armadas, sino, que también existe una inoperancia y desinterés del Estado por atender situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad.

(1) Documentación que se puede consultar en Archivo del Esclarecimiento de la Verdad: <https://archivo.comisiondelaverdad.co/la-verdad-del-pueblo-indigena>

(2) Informe de prensa disponible aquí <https://www.univision.com/noticias/america-latina/la-ley-de-la-selva-ninas-indigenas-de-amazonia-colombiana-son-victimas-de-violaciones-sexuales-en-medio-de-crisis-alimenticia>

Referente a la búsqueda de garantizar la participación efectiva, es de resaltar una situación dispar que se presenta al momento de garantizar el derecho a la consulta previa en Colombia, por una parte los órganos judiciales colombianos han reconocido la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que pueden afectar a su territorio como un derecho fundamental (3), , mientras que el ejecutivo Colombiano ha realizado acciones que demuestran la caracterización de dicho derecho como algo de trámite, buscando implementar medidas nocivas contra los pueblos originarios como un fallido intento de realizar las consultas previas de forma virtual (4) (la circular fue retirada por presión ciudadana) o cobrar un arancel (5) por la realización de las consultas previas (eliminado posteriormente por los órganos judiciales colombianos).

Resulta notable que derivada de una orden judicial fue creada la Autoridad Nacional de Consulta previa (a cargo de la rama ejecutiva) la cual entre 2020 e inicios de 2022 asumió 3357 procesos que podían afectar territorios indígenas, de ellos solo el 15% (6) terminó en una consulta efectiva a las comunidades, siendo las otras descartadas por argumentos técnicos de la entidad.

Finalmente es de resaltar que pese a la recomendación del capítulo étnico del acuerdo de paz con las Farc luego de 6 años de su firma, solo encontramos un 13% de las metas cumplidas en los indicadores relacionados con los pueblos étnicos y un 74% de las metas en un rango mínimo o sin iniciar (7).

(3) Sentencia Corte Constitucional Colombiana SU 123 de 2018

(4) Circular CIR2020-29- DMI-1000 del 27 de marzo de 2020

(5) Artículo 161 ARTÍCULO 161. El interesado en que se adelante una consulta previa deberá pagar al Ministerio del Interior- Fondo de la Dirección de Consulta Previa que se constituya como patrimonio autónomo a través de un contrato de fiducia mercantil, una tasa por los servicios de coordinación para la realización de la consulta previa y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY\_1955\_2019\_PR003] (secretariassenado.gov.co)

(6) Torres Saez, G. M., & Torres Saez, S. C. Análisis de los avances en materia de Consulta Previa en Colombia, durante el periodo de 2019-2021

(7) Cinco años después de la firma del Acuerdo Final: Reflexiones desde el monitoreo a la implementación. Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Escuela Keough de Asuntos Globales. <https://doi.org/10.7274/z029p270x6d>

## Recomendaciones

1. Respetar los procesos de consulta previa de los pueblos indígenas en temas concernientes a su territorio establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
2. Derogar las licencias ambientales concedidas a sectores privados que les permite hacer exploración y explotación minera o petrolera en territorios ancestrales e indígenas.
3. Iniciar, continuar y agilizar los procesos de deslinde y regularización de la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas.
4. Avanzar en las investigaciones para establecer a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los asesinatos en comunidades indígenas.
5. Impulsar el proceso de implementación de los acuerdos de Paz con las FARC en lo que respecta al capítulo étnico. Desde un enfoque diferencial y étnico.
6. Seguir la recomendaciones de la resolución 1325 2000 del Consejo de Seguridad con respeto a las Mujeres, paz y seguridad.
7. Fortalecer los mecanismos de participación de los pueblos étnicos, especialmente los asociados a la consulta previa, con el fin de que la participación de las comunidades sea libre, vinculante, informada y plena.